

Diez años de "revolución": más inseguros, menos productivos, más desiguales

Marino J. González R.*



El presidente Chávez llega a Miraflores en 1998 con una agenda política. Se trata de cambiar radicalmente el régimen surgido con el Pacto de Punto Fijo. Es por ello que la primera tarea fue la discusión y aprobación de la Constituyente de 1999. De manera que la agenda social fue siempre coyuntural en las primeras etapas del decenio.

Es a partir de las elecciones del año 2000 cuando el Gobierno expresa una idea más detallada de lo que considera su oferta social. Luego de año y medio de haber dirigido la administración pública, y con un horizonte de al menos seis años, el Gobierno tenía más clara su perspectiva social.

El programa presentado por el Presidente-candidato en las elecciones del 2000 traduce una visión de lo *social* muy influida por satisfacción de objetivos políticos. Así se expresa: "la búsqueda del equilibrio social se encuentra orientada no sólo a corregir las enormes diferencias que afectan a nuestra sociedad con su gran carga de exclusión e injusticia social, sino que se orienta al desarrollo pleno del ciudadano en los aspectos relacionados con el ejercicio de la democracia (...)". Antes que una política social definida para promover el bienestar y los derechos de los ciudadanos, se formula una manera de relacionarse con lo político. Se trata de vincular "lo meramente político con todas las decisiones que afectan su vida (la del ciudadano) en el día a día".

Para que lo político cobre primacía, lo social debe ser entendido como trasfondo de la organización. Se trata de disminuir "las estructuras de intermediación entre el ciudadano y el Estado así como entre los ciudadanos". Se parte de la premisa de que "en la medida que el ciudadano asume la gestión de los asuntos públicos, va perdiendo sentido y justificación la existencia separada del funcionario o dicho en otra perspectiva: la sociedad política es reabsorbida por la sociedad civil".

Para la revolución lo fundamental es la reivindicación política. Lo social es siempre accesorio. Más aún, para que los objetivos políticos se pue-

dan cumplir se requiere debilitar al Estado como prestador de servicios públicos y promotor de bienestar. En la construcción del *nuevo ciudadano* hay que dejarlo solo, que se valga por sus propios medios. Los extremos se tocan: la *revolución antineoliberal* se coloca en la misma acera de la minimización del Estado. Tal pareciera ser la práctica y resultados de la política social de la *revolución bonita*.

No es por azar, entonces, que el pobre desempeño de la administración Chávez afecte de manera tan significativa áreas en las cuales la intervención del Estado es vital para la sostenibilidad de la sociedad, tales como la garantía del derecho a la seguridad, la promoción del trabajo decente, y la reducción de las desigualdades. En todas ellas, la acción del Gobierno es fundamental para preservar los derechos de los ciudadanos.

UN GOBIERNO ALEJADO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA

El gobierno del presidente Chávez ha dejado a los venezolanos entendiéndose con sus propios medios ante la inseguridad. Es un tema que simplemente no existe en la agenda. No es de extrañar que la inseguridad jurídica, tan responsable de la disminución de la inversión privada, tenga su correlato en la inseguridad de los ciudadanos. Para los venezolanos lo máspreciado, la vida, muchas veces lo único que se tiene, especialmente en los sectores de menos recursos, no está garantizada.

El Informe 2007 del Observatorio Venezolano de Violencia evidencia el deterioro que ha experimentado Venezuela en la lucha contra la violencia. La tasa de homicidios en el período 1994-1998 estaba en el mismo nivel que la presentada por México y Brasil, esto es 25 homicidios por cada 100.000 habitantes. Ocho años después la tasa de Venezuela aumentó a 45 homicidios por cada cien mil habitantes, mientras México y Brasil no sufrieron aumentos en sus tasas.

De acuerdo con el Observatorio, el aumento de la violencia lesiona cuatro derechos fundamentales de los venezolanos. En primer lugar, el derecho a la vida: solamente en el año 2006 ocurrieron 12.257 asesinatos en el país. En segundo lugar, el derecho a la integridad personal. En la Encuesta Nacional de Victimización, realizada por el Observatorio, se encontró que en el 39,3% de los hogares entrevistados había habido una persona víctima de la violencia fatal (3%) o no fatal (36%).

También se lesiona el derecho de acceso a la justicia. La gran mayoría de las víctimas (59,4%) no denunció el delito. No lo hacen porque se percibe que la policía es incompetente o por el temor a las represalias. Finalmente, se señala la afectación al derecho a la libertad. Ejemplo de ello es que el número de secuestros se haya

multiplicado por cuatro desde 1998. Todo ello conduce a una sociedad que vive con miedo. Más del ochenta por ciento de los entrevistados manifestaron temor a ser agredidos.

UN GOBIERNO ALEJADO DEL EMPLEO PRODUCTIVO

Que la solución de la pobreza pase por la creación de empleo productivo no es una máxima adherida por la *revolución*. Si ese fuera el caso, hubiéramos tenido un Gobierno que estimulara la inversión, tanto pública como privada, nacional e internacional, orientada a la generación de empresas de todo tipo y tamaño. La prédica revolucionaria ha sido más de redistribución que de creación.

Según el último informe de la Cepal sobre la inserción internacional de América Latina y el Caribe, el panorama de riqueza no puede ser más lejano para Venezuela. En 2005 apenas el 11,3% de las exportaciones de nuestro país estaba representado por bienes industrializados. En 1995 teníamos 50%. En términos absolutos las exportaciones de bienes industrializados apenas superaron los 6.000 millones de dólares en el año 2005. En 1998 ya se encontraban en 8.500 millones de dólares.



No es por azar, entonces, que el pobre desempeño de la administración Chávez afecte de manera tan significativa áreas en las cuales la intervención del Estado es vital para la sostenibilidad de la sociedad, tales como la garantía del derecho a la seguridad, la promoción del trabajo decente, y la reducción de las desigualdades.

Para promover la riqueza requerimos consolidar espacios productivos basados en la capacidad de crear más y mejor conocimiento. Es muy evidente que el actual Gobierno tendrá muchos recursos, pero aleja cada día más a los venezolanos de la riqueza duradera.

En diez años hemos dejado de exportar productos elaborados, creadores de riqueza, para convertirnos nuevamente en exportadores de materias primas. Todo esto sucede mientras algunos de nuestros vecinos exportan productos elaborados, muchos de ellos de alta sofisticación. En Chile, por ejemplo, el 58% de las exportaciones son bienes industrializados. En Brasil alcanzan el 67%. En México superan el 81%.

Peor aún es el balance cuando se analiza la proporción de exportaciones de bienes de alta tecnología. Justamente el tipo de producción que caracteriza a muchos de los países desarrollados. En 2005 apenas el 0,3 de las exportaciones de nuestro país estaba representado por bienes de alta tecnología. En Brasil este porcentaje ascendió a 8%. En México superó el 25%.

En tales condiciones es bastante claro que nuestros ingresos de hoy no son garantía de riqueza. La dependencia de la exportación de bienes primarios como el petróleo no es antídoto contra la pobreza. Para promover la riqueza requerimos consolidar espacios productivos basados en la capacidad de crear más y mejor conocimiento. Es muy evidente que el actual Gobierno tendrá muchos recursos, pero aleja cada día más a los venezolanos de la riqueza duradera.

UN GOBIERNO ALEJADO DE LA EQUIDAD

Para un gobierno poco ganado para estimular la productividad, la equidad se convierte en una consigna muy preciada. Con el discurso promotor de la equidad se ha logrado modificar los procedimientos de selección de estudiantes en las instituciones de educación superior, por sólo mencionar un caso. Con la lógica de transferir recursos a los estratos más pobres se fundamentó la organización de las misiones. El énfasis en el discurso redentor ha conformado lealtades, políticas y electorales.

Del discurso al hecho, sin embargo, existe un largo trecho. Las propias cifras oficiales, presentadas en la III Encuesta Nacional de Presupuestos Familiares, indican una situación muy dife-

rente, hasta podríamos señalar sorprendente: los estratos más pobres de la población tienen menores ingresos, en términos porcentuales, que a mediados de la década pasada.

En 1997 el decil 1, es decir las familias con menores ingresos, tenían el 3% de todos los ingresos de las familias en el país. En el año 2005 este porcentaje de había reducido a menos de la mitad, exactamente 1,4%. En el caso de las familias del decil 2, la reducción fue de 3,3% a 2,7%. El 20% más pobre de la población tiene menos ingresos (con respecto al total de los ingresos de las familias) que antes de la *revolución bonita*.

El Gobierno se ha retraído de la búsqueda de la equidad por dos vías. La primera ha sido la creación de un aparato de protección (las misiones) que tiene objetivos más políticos que sociales. La transferencia de los recursos a los sectores de mayor necesidad es en realidad un objetivo secundario. De allí que no existan los mecanismos de seguimiento que permitan identificar familias y personas en riesgo, y el impacto de las prestaciones asociadas.

La segunda vía es la escasa utilización de los mecanismos de la inversión pública para la compensación del ingreso de las familias. Los subsidios directos, utilizados con éxito en muchos países para aumentar el poder adquisitivo, requieren estrictos mecanismos de seguimiento y evaluación, tanto técnica como política. Nada de eso ha existido en el actual Gobierno.

DIEZ AÑOS DE RETROCESOS

Pocos gobiernos pueden presentar un balance tan pobre como la administración del presidente Chávez en la garantía de derechos sociales. La ideologización de la gestión pública, la incompetencia en el diseño e implementación de políticas públicas, y la eliminación de los contrapesos institucionales han tenido un efecto neto en las condiciones de vida de la población. A pesar de la propaganda y la utilización masiva de contenidos y medios, la realidad no puede ocultarse.

Los venezolanos estamos hoy más inseguros, con menos posibilidades de crear riqueza, y con mayor desigualdad que a finales de 1998. Esos resultados han sido en gran medida deliberados, ajustados a una concepción del Estado y de los individuos, incompatible con el reconocimiento de derechos en una sociedad democrática. Identificar estos retrocesos y sus causas, es el primer paso para plantearnos nuevas opciones como sociedad.

* Profesor Titular de la Universidad Simón Bolívar